

México, desafíos políticos y... no desaprender de la experiencia regional

OSCAR MAÑÁN*

La experiencia latinoamericana reciente aporta varias lecciones para impulsar proyectos de cambio social. Desde ese mirador, el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador puede considerar varios desafíos: conciliar el crecimiento electoral con una agenda de cambios más o menos radicales, replantear la inserción internacional y tejer alianzas con gobiernos afines al cambio social, vincularse al mercado mundial y afrontar las políticas comerciales asimétricas, asumir el control de la producción y los recursos naturales en un ámbito de convivencia diversa y multicultural, reorganizar la economía nacional y extender los derechos sociales, imprimir una connotación positiva a la lucha anticorrupción mediante la reconstrucción de una institucionalidad que genere una economía que incluya a los pobres, construir un Estado garante de la estabilidad política y desmantelar los soporte del antiguo régimen, y reconocer las diferentes nacionalidades y sus autonomías para construir un «mundo donde quepan todos los mundos».

De dos peligros debe cuidarse el hombre nuevo:
de la derecha cuando es diestra,
de la izquierda cuando es siniestra.

Mario Benedetti

México tuvo elecciones nacionales históricas para que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la alianza Juntos Haremos Historia conformada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES) llegaran al gobierno con 52.9% de los votos. La diferencia fue inusual frente a las dos coaliciones que disputaban mayoritariamente la contienda: la alianza Por México al Frente con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC) que cosecharon 22.5%; y la coalición Todos por México conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México

(PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal) con un magro 16.4% de los votos.

Este país conformó su Estado moderno tardíamente, luego de la revolución nacionalista que comenzara en 1910 y después del largo periodo de inestabilidad política de los 1920, cuando Lázaro Cárdenas articularía un pacto social donde diferentes sectores sociales se incorporarían al consumo de masas. Dicho Estado corporativo fue hegemónico y, bajo el gobierno ininterrumpido del PRI (desde 1946), mantendría una estabilidad política sin igual hasta 2000. Esa estabilidad política se sostuvo con fuertes dosis de autoritarismo y represión (del que son ejemplos las masacres de Tlatelolco en 1968 y Corpus Christi en 1971), pero

*Profesor, Centro Regional de Profesores y de la Universidad de la República, Uruguay

siempre con una institucionalidad literalmente a prueba de balas. Precisamente, el aludido autoritarismo político, bajo un manto de legalidad sospechada, condujo a Vargas Llosa a definir a México como la «dictadura perfecta», lo que le significó la expulsión del país, con fundamento en la aplicación del artículo 33 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Empero, entre los 1980 y 1990, el neoliberalismo económico y su inserción subordinada a los intereses de Estados Unidos, lejos incluso de la independencia formal de años anteriores, el régimen político comienza a desintegrarse tráguándose a los líderes que prometían transformaciones dentro del mismo partido de Estado (Colosio Murrieta, Ruiz Massieu, entre otros). Lo envidiado por otros países fue la capacidad de «producción simbólica» que tuvo el Estado mexicano y que mantuvo un velo impenetrable a pesar de los desmanes de la política. En 2000, el PAN ganaría las elecciones para fechar un periodo de alternancia con el PRI, pero que no obstaría para que siguiera avanzando ese proceso constante de desvanecimiento del pacto social que explicara la estabilidad política anterior.

Actualmente, parece que cayeron todos los velos posibles y se deja traslucir un Estado en desintegración,¹ aparte de los siempre violentos coletazos de los añejos pactos sociales que se terminan o pujan por rearticularse. Esto puede verse en los empujes de la violencia institucionalizada en los diferentes niveles del Estado (federal, estatal, municipal) que explican matanzas crueles, de Acteal a Ayotzinapa, además de los asesinatos de periodistas críticos y políticos del presente. Sin olvidar las luchas intestinas de grupos del «crimen organizado» o no tanto, los intentos de fraude electoral, las redes de extorsión, el intercambio de favores, los grupos paramilitares y las «autodefensas» que buscan llenar los vacíos que ese Estado que se desintegra deja.

El dilema de la coalición de gobierno estará en pacificar al país, lo que exige justicia, derechos,

desarticular la violencia institucionalizada, es decir, restablecer la esencia de la política y enterrar ese «poder corrupto» que se aleja de sus bases colectivas soberanas. Estas notas apuntan temas inminentes para un cambio social necesario en México, alguno esbozado de manera general en el Programa de Gobierno de Morena, con el objetivo de discutir la experiencia regional y tomar aprendizajes de la misma.

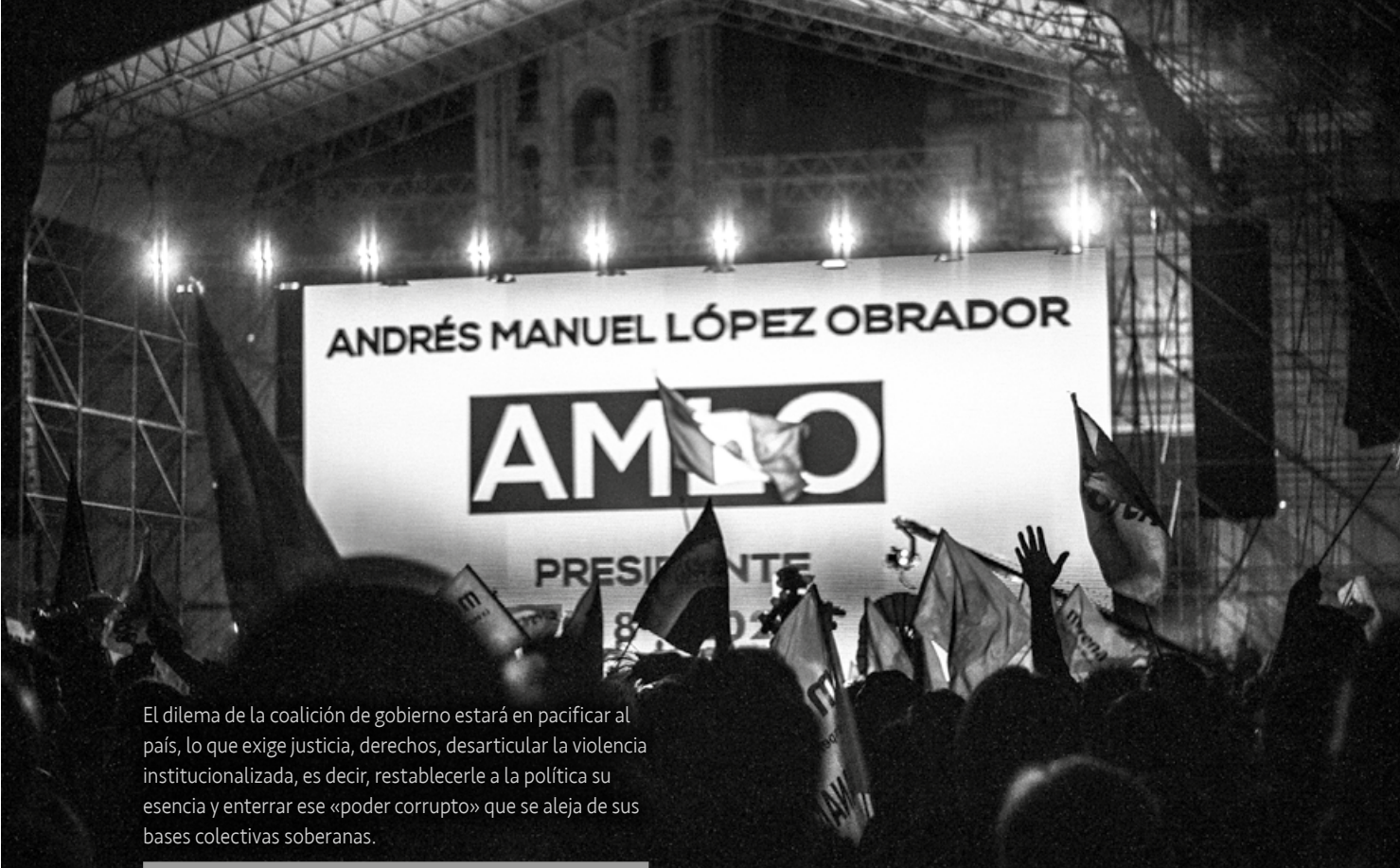
Los desafíos de no desaprender de la región

El cambio social y político siempre trae consigo conflictos, y para construir algo diferente es necesario en cualquier realidad romper, sin concesiones, con lo anterior. Como reza la frase que se le atribuye a Einstein, sería una «locura hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes». Vale decir que el momento esencial para los cambios, o por lo menos para «marcar la cancha» (el rumbo), son los primeros 100 días de gobierno, si se desperdicia «la luna de miel» inicial, la historia muestra que las dificultades se acrecientan.

1. Uno de los aprendizajes sobresalientes de la región es la dificultad planteada para lidiar con las contradicciones entre el crecimiento electoral de un movimiento o partido y su esencia, si éste propone cambios más o menos radicales. La política de alianzas llevó a desdibujar las propuestas programáticas de los movimientos políticos, en especial de aquellos pertenecientes al espectro ideológico de las izquierdas. De aquí que en aras de constituir fuerzas electorales imbatibles se abandonaron cambios sociales perseguidos históricamente por tales movimientos o partidos, por lo que perdieron la confianza y el respeto de la comunidad política. A pesar de la popularidad que el expresidente José Mujica de Uruguay ha cosechado a escala internacional, en el ámbito nacional se recuerda su célebre frase de que «para ganar hay que abrazarse con las culebras», tal fue el sello de la política de alianzas de su campaña electoral. Las culebras terminaron mordiendo el proyecto de la izquierda, porque el morder está en su naturaleza, con un costo demasiado alto para el país y las frustraciones para el proyecto de la izquierda. Las experiencias de Dilma Rousseff en Brasil o el presidente Fernando Lugo en Paraguay atestiguan igualmente cómo las alianzas electorales que no sustentan proyectos políticos de base y programáticos de mediano plazo terminan naufragando con procesos dolorosos para los países.

2. Otro desafío no resuelto es la inserción internacional de los países, decisión política fundamental de los Estados si las hay, además de elegir los amigos, aquellos socios con quienes compartir un proyecto político más allá del comercial. México tuvo una tradición histórica de diplomacia internacional que hizo escuela en América Latina, basado en una política de no intervención y de solidaridad internacional que abandonó en la década de los 1990; hoy toda la

¹ Jesús Castillo y Oscar Mañán, «México un Estado en desintegración: violencia institucionalizada como degradación extrema de la política», *Revista Mexicana de Ciencias Agrarias*, vol.1, 2015, pp.81-86.



El dilema de la coalición de gobierno estará en pacificar al país, lo que exige justicia, derechos, desarticular la violencia institucionalizada, es decir, restablecerle a la política su esencia y enterrar ese «poder corrupto» que se aleja de sus bases colectivas soberanas.

región la extraña. Enfrentar las políticas imperiales actuales exige construir confianza y alianzas estratégicas fuertes, máxime con líderes como Donald Trump que, parafraseando a Tomás Eloy Martínez, «a menudo tienen un coeficiente intelectual menor al promedio de la población». En efecto: para construir apoyos internacionales estratégicos es imprescindible construir una institucionalidad supranacional, que en el caso de los países mayores de la región deberían además financiarla. Por ejemplo, un banco de desarrollo regional que apunte procesos productivos estratégicos, ya sea en energía o infraestructura, puede ser un camino para el fortalecimiento de una visión antiimperialista. El gobierno de Hugo Chávez en Venezuela destinó ingentes recursos para fortalecer organismos como la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). De otro modo éste y otros proyectos que enfrentaron al imperialismo no hubieran subsistido.²

² Una mirada miope, a menudo presente en la misma Venezuela, le reclamaba a Chávez el gasto excesivo en solidaridad

3. Las políticas comerciales son también una parte fundamental de dicha inserción internacional. México desempeña un papel en cuanto país de dimensiones continentales, y no cabe duda que es tiempo que comience a mirar hacia el Sur. Las políticas estrictamente comerciales o aquellas «más políticas» denominadas de integración, requieren de Estados fuertes, so pena de permanecer como rehén de lo que las empresas transnacionales y la institucionalidad jurídica internacional que opera por sobre los Estados nacionales (tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones [Ciadi], las calificadoras de riesgo que santifican la inversión, etcétera). Asimismo, una política mirando al Sur es posible, al sur de América, África, Asia; «una integración de productores y no de consumidores»³ pensadas con el objetivo de potenciar la capacidad productiva y no solamente de ampliar mercados de posibles consumidores. Este es *el desafío de romper la lógica de los tratados de libre comercio nacidos bajo los designios del neoconservadurismo estadounidense*. Popularmente se sostiene que a los vecinos no se les puede elegir, y la inserción internacional de México está

internacional o en dicha institucionalidad para la unión de los pueblos vinculado al sueño idealizado de Bolívar; sin embargo, no se repara lo suficiente en la consideración sobre lo fugaz que hubiera sido el gobierno de Chávez sin esta coraza internacional que lo defendiera.

³ Oscar Mañán, «Inserción internacional de América Latina: retos para un cambio de rumbo», ponencia presentada en la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales, Guadalajara, julio de 2012, en <https://www.researchgate.net/publication/281066572>

estrechamente atada a Estados Unidos; eso no cambiará por razones geográficas o por la comunidad binacional que comparten. Empero, es menester articular un conjunto de alianzas Sur-Sur que lo posicione más allá del lugar de mero patio trasero del gigante del norte.

4. Los cambios económicos que se realicen deben pensarse para construir un control nacional de la actividad productiva y de los principales recursos naturales, que pueden ser conceptualizados como «bienes comunes» de toda la población; asimismo, rescatar y *aggiornar* viejos valores de la revolución nacionalista de principio de siglo XX para articularlos con nuevos desafíos de una convivencia diversa y multicultural emergente. No debe desaprenderse la experiencia de los progresismos latinoamericanos, basados en el extractivismo, en la inversión extranjera directa que busca grandes subsidios impositivos bajo el blindaje del derecho transnacional privado, el cual defiende sus intereses subordinando la soberanía de dichos países. Uruguay, el país más pequeño del sur, enfrentó un juicio millonario de la tabacalera Phillip Morris⁴ que pretendió impedir una política antitabaco pensada como política de promoción de la salud. La confrontación pudo ganarse porque se enfrentó y se buscaron respaldos económicos y políticos con el fin de solventar la soberanía nacional. El mismo país aprobó en 2013 una ley⁵ para regular la producción, distribución y venta del *cannabis*, como parte de una política orientada a minimizar riesgos y reducir daños, promoviendo la información, educación y prevención sobre el uso problemático de drogas. Con la intención de implementar el control de la distribución y aislarlo del tráfico ilegal, la venta se realizó en farmacias —hecho que debió enfrentar a la banca transnacional—, misma que a su vez procedió a cerrar las cuentas de las empresas que expendían la marihuana producida bajo regulación estatal. Otra perla del orden capitalista vigente.

5. Las tareas de largo aliento deben abordarse sin demoras, entre otras, la reorganización económica, la extensión de derechos y la lucha anticorrupción que implica, asimismo, una política positiva de construcción de institucionalidad para hacer una economía más amigable con los más de 50 millones de pobres. En adición, fortalecer los controles estatales de las fronteras para desalentar los negocios ilegales y tráfico diversos (ya sea de drogas, armas o personas), para lo que será menester también emprender un desmontaje de todos los niveles del Estado permisivos en esos aspectos. Sin embargo, los frentes de lucha deberán elegirse con cuidado para lidiar con posi-

⁴ Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Laudo, Philip Morris Brands SárI, Philip Morris Products S.A. y Abal Hermanos S.A. (las demandantes) y República Oriental del Uruguay (la demandada) (Caso CIADIN.° ARB/10/7), 2016, en https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2016/noticias/NO_U130/laudo_spa1.pdf

⁵ Poder Legislativo, «Ley 19.172 Marihuana y sus Derivados», 7 de enero de 2014, en <https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp169350.htm>

bles contradicciones entre la estabilidad política y la profundidad de los cambios. El desafío es de dimensiones gigantescas, tanto en la desarticulación del tráfico de estupefacientes, la ocupación de los territorios y el desmantelamiento de las organizaciones dedicadas a la extorsión que generan inestabilidades de todo tipo. Enfrentar ese poder corrupto, apartado de la comunidad soberana en el sentido de Dussel,⁶ que se ejerce en los diferentes estados de la república, no será fácil y deben primero desarticularse las redes institucionales que lo hacen posible. La contradicción es monumental, fortalecer al Estado regulador de la economía y árbitro de los desmanes de la política, a la vez que se cercenan los tentáculos de dicho Estado que sostienen la red de corrupción o del negocio *non sancto*. Este quizá es el desafío donde se deberá poner énfasis, para ello la experiencia contemporánea de Brasil es fundamental, donde el financiamiento de los partidos y la actividad de la principal empresa público-privada puso a temblar la estabilidad democrática. El país sudamericano vio tambalear el sistema político entero con acusaciones varias de corrupción que apuntaban a un financiamiento de los partidos políticos (oscurecido y aceptado por varios años), a la vez que la clase política con frecuencia recibía «dádivas» de grandes empresas. En Perú, de igual modo, su expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, debió renunciar por sobornos recibidos de dicha empresa brasileña. Ecuador no fue la excepción y su vicepresidente fue acusado de tomar incentivos de esa empresa. El caso de México podría tener dimensiones aún mayores a las imaginables para el caso Brasil, lidiar con esa ética política no será el mejor escenario, mientras que enfrentarlo parcialmente puede cuestionar todo el castillo de naipes que sostuvo 90 años de estabilidad política.

6. El desafío de construir un nuevo Estado tendrá éxito si se corroen los apoyos del actual y se enfrentan decididamente a aquellos sectores que resistirán la pérdida de privilegios: la estabilidad política deberá responder a nuevas bases. Puede

⁶ Enrique Dussel, *20 tesis de política*, México, Siglo XXI, 2006.



Fortalecer los controles estatales de las fronteras para desalentar los negocios ilegales y tráficos diversos (ya sea de drogas, armas o personas), para lo que será menester también emprender un desguace de todos los niveles del Estado permisivos en tales aspectos.

tipificarse al Estado mexicano como «en desintegración», cuestión que agrava la reconstrucción de los aspectos esenciales de la institucionalidad que se necesita. Los apoyos del nuevo pacto hegemónico deberán ser los sectores hasta ahora al margen: sectores populares, trabajadores sedientos de justicia, campesinos, indígenas, productores nacionales, pequeños comerciantes formales e informales, empresarios con vocación nacional entre otros, quienes deberán conquistar las calles y ser la línea de defensa del cambio. No obstante, la dificultad estará en desarrollar un proyecto capaz de seducir a todas estas clases, sectores y actores sociales para direccionarlos hacia la posibilidad cierta de los cambios estructurales que se propongan; porque la paciencia no es una virtud latinoamericana (por ejemplo, los gobiernos que intentaron cambios en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, entre otros).

7. Parte del anterior desafío es el lugar de las diferentes nacionalidades y sus autonomías para la construcción de un «mundo donde quepan todos los mundos». El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) exponía el 1 de enero 1996:

El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La Patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos.⁷

⁷ Ana Esther Ceceña, «El zapatismo. De la inclusión en la nación al mundo en el que quepan todos los mundos», 2004, en <http://www.geopolitica.ws/articulo/el-zapatismo-de-la-inclusion-en-la-nacion-al-mundo/>

En el programa que guía la lucha de Morena se plantea una «nación pluricultural» y «el respeto a los pueblos indígenas»; no obstante, debería trabajar en construir múltiples naciones que hagan de la pluriculturalidad un México habitable por todas y cada uno de sus riquísimas tradiciones y las nuevas construcciones que aparezcan. Bolivia y Ecuador avanzaron en las definiciones conceptuales que vienen de las tradiciones indígenas del Buen Vivir o el Vivir Bien, propias de las culturas Quechua y Aymara, empero no están exentos de contradicciones. Ambos países avanzaron hacia una crítica a las ideas tradicionales de desarrollo y expusieron los «límites políticos, económicos, sociales y ambientales» del crecimiento económico capitalista contemporáneo basado en la explotación de los recursos naturales. Ecuador incluso elevó a rango constitucional «los derechos de la naturaleza» (artículos 71-74)⁸ y avanzó en la construcción de indicadores para medir ese concepto cultural de Buen Vivir. Bolivia tiene un proceso conceptual interesante que cuestiona la vertiente productivista del desarrollo, pero muchas veces acepta más extractivismo en aras de avanzar en esas alternativas. De lo que se trata es de avanzar en alternativas al desarrollo en sus vertientes clásicas, más allá de las alternativas del mismo desarrollismo en vertientes renovadas.⁹

En cualquier caso, el nuevo gobierno mexicano deberá más temprano que tarde enfrentar estos desafíos. No desestimar que la experiencia regional será fundamental para emprender un camino de cambios y construir la viabilidad política de ese nuevo país en el que por fin «quepan todos los mundos». 🐦

⁸ Constitución Política de la República de Ecuador, en <http://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constitucion.pdf>

⁹ Eduardo Gudynas, 2011, «Debates sobre el Desarrollo y sus alternativas en América Latina. Una breve guía heterodoxa», en M. Lang y D. Mokrani (eds.), *Más allá del desarrollo*, Quito, Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Fundación Rosa Luxemburgo y AbyaYala, pp. 21-53.